

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO  
TRIBUNAL DE APELACIONES  
PANEL IX

FLL CONSTRUCTION  
INC.

RECURRIDA

V.

DEPARTAMENTO DE  
RECURSOS NATURALES  
Y AMBIENTALES;  
ESTADO LIBRE  
ASOCIADO DE PUERTO  
RICO

PETICIONARIO

KLCE202200890

*Certiorari*  
procedente del  
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala  
Superior de  
San Juan

Caso Núm.  
SJ2020CV00917

Sobre:  
INCUMPLIMIENTO  
DE CONTRATO;  
COBRO DE DINERO

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez Ronda Del Toro y la Jueza Díaz Rivera

**Ronda Del Toro, Juez Ponente**

**SENTENCIA**

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de noviembre de 2022.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, representado por la Oficina del Procurador General de Puerto Rico, [en adelante, Gobierno, Departamento de Recursos Naturales o recurrente] nos solicita la revocación de la Resolución que emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, el 7 de julio de 2022, notificada el día siguiente. Mediante el referido dictamen, el foro impugnado declaró *No Ha Lugar* la Moción de Paralización presentada por el recurrente.

Por los fundamentos que exponemos, expedimos el auto de *Certiorari* y revocamos la Resolución recurrida.

**I.**

La presente acción se inicia el 3 de febrero de 2020, fecha en que FLL Construction, Inc., [FLL] presentó una demanda de incumplimiento de contrato y cobro de dinero contra el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Alegaron

que el 10 de agosto de 2018, suscribieron un Contrato de Servicios Profesionales y Consultivos con el Departamento de Recursos Naturales para la operación y mantenimiento de las casas bombas bajo la administración del Departamento. El referido contrato fue objeto de varias enmiendas, con el propósito de extender la fecha de vigencia y la cuantía, por lo que reclamaron el pago total de \$888,245.60<sup>1</sup>, más intereses, costas y honorarios. El Gobierno contestó la demanda.

Así las cosas, el 11 de mayo de 2021 FLL presentó una *Solicitud de sentencia sumaria*, a la que se opuso el Departamento de Recursos Naturales. Luego de los trámites del descubrimiento de pruebas y la celebración de la *Conferencia con Antelación al Juicio*, el 4 de abril de 2022, el Gobierno presentó un *Aviso de Injunction*<sup>2</sup>. En esta, alegaron que el 18 de enero de 2022 el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico emitió un *Confirmation Order* mediante el cual se confirmó el Plan de Ajuste de la Deuda (Plan de Ajuste). Mencionaron que, a tenor con el referido Plan, existe un *injunction* permanente que está en pleno vigor en los casos presentados en o antes del 15 de marzo de 2022, que es la fecha de efectividad del Plan de Ajuste. Adujeron, asimismo que la Junta de Supervisión Fiscal presentó ante el Tribunal de Distrito federal un *Notice* con la fecha límite para presentar una solicitud de pago por Reclamaciones de Gastos Administrativos. En consecuencia, aseveraron que el foro primario no tenía jurisdicción para continuar con el trámite judicial del presente caso en virtud del

---

<sup>1</sup> Posteriormente, las partes estipularon que el balance no pagado por los servicios prestados ascendía a \$617,275.00. Apéndice del Recurrido, pág. 10, inciso 19.

<sup>2</sup> *Aviso de Injunction Paralizando la Litigación del Presente Caso y Sobre el Requisito de Presentar Una Solicitud de Gastos Administrativos ante el Tribunal de Título III.*

*injunction* permanente contemplado en el *Confirmation Order* y el *Notice* presentado por la Junta de Supervisión Fiscal.

El 12 de abril de 2022 la recurrida FLL presentó *Moción en Oposición al "Aviso de injunction"*. Adujo, en síntesis, que no le aplicaba el *injunction* del *Confirmation Order*, como tampoco, que el único remedio que tenían disponible sea el de gastos administrativos. Sostuvo que la reclamación objeto de este caso nació del contrato otorgado el 10 de agosto de 2018. Por surgir luego de la quiebra, no formó parte del catálogo de deudas sobre el cual el tribunal de quiebras adquirió jurisdicción. Aduce, por tanto, que no cubre la reclamación objeto de este pleito y no existe impedimento alguno para la continuación del caso.

El 5 de mayo de 2022 el Departamento de Recursos Naturales presentó una *Réplica* a la moción del FLL. El 10 de mayo de 2022 el foro primario le ordenó al Departamento de Recursos Naturales que ampliara sus argumentos.

El 1ro de junio de 2022 el Departamento de Recursos Naturales presentó una *Moción en Cumplimiento de Orden* y reiteró su petición de *Aviso de Injunction* en la litigación del caso. Tras ello, el 2 de junio de 2022 el foro primario le concedió término al demandante FLL para que presentara su posición. Según ordenado, FLL respondió con una *Dúplica a Mociones sobre injunction paralizando la litigación del presente caso y sobre la presentación de solicitud de gastos administrativos ante el Tribunal de Título III*.

Examinados los escritos de ambas partes, el 7 de julio de 2022, notificada al siguiente día, el foro primario declaró **No Ha Lugar** la Moción de paralización que presentó el Gobierno. En desacuerdo, el Departamento de Recursos Naturales solicitó

reconsideración y el 22 de julio de 2022, notificada el 28 de julio del corriente, el foro primario la denegó.

Aun inconforme, el Departamento de Recursos Naturales recurre ante este foro apelativo y plantea que incidió el foro primario al:

*Asumir jurisdicción sobre la materia y denegar el aviso de injunction en virtud del Confirmation Order, el cual ordena la paralización del caso de epígrafe y provee como único remedio que el reclamante presente una solicitud de gastos administrativos ante la Corte de Título III.*

Examinada la *Petición de Certiorari*, le concedimos término a la recurrida para presentar su Alegato en Oposición y así lo hizo. Con el beneficio de ambas comparecencias, disponemos.

## **II.**

### **A.**

El primer factor para considerar en toda situación jurídica que se presente ante un foro adjudicativo es el aspecto jurisdiccional. Torres Alvarado v. Madera Atilés, 202 DPR 495 (2019); Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254 (2018). Los asuntos relacionados con la jurisdicción de un tribunal son privilegiados y deben atenderse con preeminencia. Pérez Rodríguez v. López Rodríguez et al., 210 DPR\_\_\_\_ (2022), 2022 TSPR 95; Allied Mgmt. Grp., Inc. v. Oriental Bank, 204 DPR 386 (2020). La jurisdicción de un tribunal consiste en el poder que tiene para atender y decidir casos y controversias. *Íd.*; Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 249 (2012); S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). La ausencia de esta no es susceptible de ser subsanada, por lo que una sentencia dictada por un tribunal sin jurisdicción es nula e inexistente en derecho. Pérez Rodríguez v. López Rodríguez et al., *supra*; Allied Mgmt. Grp., Inc. v. Oriental Bank, *supra*; Cruz Padilla

v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012). Por eso, cada foro adjudicativo tiene el deber de examinar su propia jurisdicción y la del foro de donde procede el recurso que tiene ante sí. Pérez Rodríguez v. López Rodríguez et al., *supra*; Allied Mgmt. Grp., Inc. v. Oriental Bank, *supra*; Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, *supra*; S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007).

### B.

El 3 de mayo de 2017 la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico presentó una petición de quiebra a nombre del Gobierno de Puerto Rico, según lo permite el Título III del Puerto Rico Oversight, Management, Economic Stability Act (PROMESA) 48 USC sec. 2101 *et seq.* En lo pertinente, la sección 301(a) del Título III de PROMESA incorporó las secciones 362<sup>3</sup> [1] y 922 del Código Federal de Quiebras en

---

<sup>3 5</sup> [1] La sección 362 (a) del Código de Quiebras enumera las circunstancias en que la presentación de una quiebra opera como un "Automatic stay". Esta incluye lo siguiente:

(a) Except as provided in subsection (b) of this section, a petition filed under section 301, 302, or 303 of this title, or an application filed under section 5(a)(3) of the Securities Investor Protection Act of 1970, operates as a stay, applicable to all entities, of –

(1) the commencement or continuation, including the issuance or employment of process, of a judicial, administrative, or other action or proceeding against the **debtor** that was or could have been commenced before the commencement of the case under this title, or to recover a claim against **the debtor** that arose before the commencement of the case under this title;

(2) the enforcement, against the debtor or against property of the estate, of a judgment obtained before the commencement of the case under this title;

(3) any act to obtain possession of property of the estate or of property from the estate or to exercise control over property of the estate;

(4) any act to create, perfect, or enforce any lien against property of the estate;

(5) any act to create, perfect, or enforce against property of the debtor any lien to the extent that such lien secures a claim that arose before the commencement of the case under this title;

(6) any act to collect, assess, or recover a claim against the debtor that arose before the commencement of the case under this title;

(7) the setoff of any debt owing to the debtor that arose before the commencement of the case under this title against any claim against the debtor; and

(8) the commencement or continuation of a proceeding before the United States Tax Court concerning a tax liability of a debtor that is a corporation for a taxable period the bankruptcy court may determine or concerning the tax liability of a debtor who is an individual for a taxable period ending before the date of the order for relief under this title.

11 USC sec. 362 (a).

torno a paralizaciones automáticas de pleitos contra el deudor y su propiedad. *Íd.*, sec. 2161(a). Lacourt Martínez, et al v. Jta. Lib. et al, 198 DPR 786, 787 (2017); Lab. Clínico, et al v. Depto. Salud et al, 198 DPR 790 (2017). Ello trajo consigo la paralización automática de aquellos pleitos que generalmente reclaman, como parte de los remedios, una compensación monetaria. Particularmente, los pleitos presentados – o que pudieron presentarse – contra el Gobierno de Puerto Rico antes de que se iniciara la quiebra. Requena Mercado v. Policía de Puerto Rico, 205 DPR 285, 291 (2020). Véase, además, 48 USC sec. 2161(a); 11 USC secs. 362 y 922; Dpto. de Hacienda v.UGT, 203 DPR 1049 (2020).

El objetivo principal de la paralización es liberar al deudor de presiones financieras mientras se dilucida el procedimiento de quiebra. Lacourt Martínez v. Jta. Lib. et al, *supra*. Con la paralización se impide, entre otras cosas, el comienzo o la continuación de cualquier proceso judicial, administrativo o de otra índole, que fue o pudo haber sido interpuesto en contra del deudor, o para ejercitar cualquier acción cuyo derecho nació antes de que se iniciara la quiebra. Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 255 (2012); Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 491 (2010); 11 USC sec. 362.

### C.

Luego de que el Gobierno realizara una petición de quiebra, al amparo del Título III de PROMESA, el 18 de enero de 2022, la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico confirmó el Plan de Ajuste Fiscal que presentó el Gobierno de Puerto Rico y que fue certificado por la Junta de Supervisión Fiscal. Para ello emitió, como parte del caso *In re Commonwealth of Puerto Rico*, Case. No. 17BK3283-LTS, el *Order and Judgment*

*Confirming Modified Eighth Amended Title III Joint Plan of Adjustment of the Commonwealth of Puerto Rico, the Employees Retirement System of the Government of the Commonwealth of Puerto Rico, and the Puerto Rico Public Buildings Authority (Confirmation Order)*. Conforme a ello, se fijó el 15 de marzo de 2022 como fecha de efectividad de referido Plan de Ajuste.

En lo pertinente, el párrafo 59 del *Confirmation Order* (Orden de Confirmación), dispuso un mecanismo de interdicto en las reclamaciones, que establece lo siguiente:

59. Injunction on Claims.

Except as otherwise expressly provided in section 92.11 of the Plan, this Confirmation Order, or such other Final Order of the Title III Court that is applicable, **all Entities who have held, hold, or in the future hold Claims** or any other debt or liability that is discharged or released pursuant to section 92.2 of the Plan or who have held, hold, or in the future hold Claims or any other debt or liability discharged or released pursuant to section 92.2 of the Plan **are permanently enjoined, from and after the Effective Date, from (a) commencing or continuing, directly or indirectly, in any manner, any action or other proceeding (including, without limitation, any judicial, arbitral, administrative, or other proceeding) of any kind on any such Claim** or other debt or liability discharged pursuant to the Plan against any of the Released Parties or any of their respective assets or property, (b) the enforcement, attachment, collection or recovery by any manner or means of any judgment, award, decree, or order against any of the Released Parties or any of their respective assets or property on account of any Claim or other debt or liability discharged pursuant to the Plan, (c) creating, perfecting, or enforcing any encumbrance of any kind against any of the Released Parties or any of their respective assets or property on account of any Claim or other debt or liability discharged pursuant to the Plan, and (d) except to the extent provided, permitted or preserved by sections 553, 555, 556, 559, or 560 of the Bankruptcy Code or pursuant to the common law right of recoupment, asserting any right of setoff, subrogation, or recoupment of any kind against any obligation due from any of the Released Parties or any of their respective assets or property, with respect to any such Claim or other debt or liability discharged pursuant to the Plan. Such injunction shall extend to all successors and assigns of the Released Parties and their respective assets and property. Notwithstanding

the foregoing, without prejudice to the exculpation rights set forth in section 92.7 of the Plan and decretal paragraph 61 hereof, nothing contained in the Plan or this Confirmation Order is intended, nor shall it be construed, to be a non consensual third-party release of the PSA Creditors, AFSCME, and of their respective Related Persons by Creditors of the Debtors. (Énfasis nuestro).

Asimismo, la aludida Sección 92.2 del Plan de Ajuste de la Deuda dispone en lo aquí pertinente, lo siguiente:

92.2 Discharge and Release of Claims and Causes of Action:

(a) Except as expressly provided in the Plan or the Confirmation Order, all distributions and rights afforded under the Plan shall be, and shall be deemed to be, in exchange for, and in complete satisfaction, settlement, **discharge and release of, all Claims or Causes of Action against the Debtors and Reorganized Debtors that arose, in whole or in part, prior to the Effective Date, relating to the Title III Cases**, the Debtors or Reorganized Debtors or any of their respective Assets, property, or interests of any nature whatsoever, **including any interest accrued on such Claims from and after the Petition Date, and regardless of whether any property will have been distributed or retained pursuant to the Plan on account of such Claims or Causes of Action**; provided, however, that, without prejudice to the exculpation rights set forth in Section 92.7 hereof, nothing contained in the Plan or the Confirmation Order is intended, nor shall it be construed, to be a grant of a non-consensual third-party release of the PSA Creditors, AFSCME, and of their respective Related Persons by Creditors of the Debtors. Upon the Effective Date, the Debtors and Reorganized Debtors shall be deemed discharged and released from any and all Claims, Causes of Action and any other debts that arose, in whole or in part, prior to the Effective Date (including prior to the Petition Date), and Claims of the kind specified in sections 502(g), 502(h) or 502(i) of the Bankruptcy Code and PROMESA Section 407, whether or not (a) a proof of claim based upon such Claim is filed or deemed filed under section 501 of the Bankruptcy Code, (b) such Claim is allowed under section 502 of the Bankruptcy Code and PROMESA Section 407 (or is otherwise resolved), or (c) the holder of a Claim based upon such debt voted to accept the Plan. For the avoidance of doubt, nothing contained herein or in the Confirmation Order shall release, discharge or enjoin any claims or causes of action against PREPA arising from or related to PREPA-issued bonds, including, without limitation, Monoline-issued insurance pertaining thereto, and PREPA is not releasing any claims or causes of action against any



non- Debtor Entity. Claims and causes of action against PREPA arising from or related to PREPA issued bonds, and releases against PREPA and its assets shall be addressed in PREPA's Title III case, including, without limitation, any plan of adjustment therein.

(b) Except as expressly provided in the Plan or the Confirmation Order, all Entities shall be precluded from asserting any and all Claims against the Debtors and Reorganized Debtors, and each of their respective Assets, property and rights, remedies, Claims or Causes of Action or liabilities of any nature whatsoever, relating to the Title III Cases, the Debtors or Reorganized Debtors or any of their respective Assets and property, including any interest accrued on such Claims from and after the Petition Date, and regardless of whether any property will have been distributed or retained pursuant to the Plan on account of such Claims or other obligations, suits, judgments, damages, debts, rights, remedies, causes of action or **liabilities. In accordance with the foregoing, except as expressly provided in the Plan or the Confirmation Order, the Confirmation Order shall constitute a judicial determination, as of the Effective Date, of the discharge and release of all such Claims, Causes of Action or debt of or against the Debtors and the Reorganized Debtors pursuant to sections 524 and 944 of the Bankruptcy Code, applicable to the Title III Case pursuant to Section 301 of PROMESA, and such discharge shall void and extinguish any judgment obtained against the Debtors or Reorganized Debtors and their respective Assets, and property at any time, to the extent such judgment is related to a discharged Claim, debt or liability.** As of the Effective Date, and in consideration for the value provided under the Plan, each holder of a Claim in any Class under this Plan shall be and hereby is deemed to release and forever waive and discharge as against the Debtors and Reorganized Debtors, and their respective Assets and property and all such Claims. [...] (Énfasis suplido).

Respecto al término "cause of action", la Sección 1.126 del Plan de Ajuste de la Deuda lo define como:

1.126 Causes of Action:

All claims, actions, causes of action, rights to payment, choses in action, suits, debts, dues, sums of money, accounts, reckonings, bonds, bills, specialties, covenants, contracts, controversies, **agreements**, promises, variances, trespasses, damages, judgments, remedies, rights of setoff, third-party claims, subrogation claims, contribution claims, reimbursement claims, indemnity claims, counterclaims, and cross claims (including, but not

limited to, all claims for breach of fiduciary duty, negligence, malpractice, breach of contract, aiding and abetting, fraud, inducement, avoidance, recovery, subordination, and all Avoidance Actions) **that are pending or may be asserted against any Entity whether arising on or before the Effective Date, based in law** or equity, including, but not limited to, under the Bankruptcy Code, whether known, unknown, reduced to judgment, not reduced to judgment, liquidated, unliquidated, fixed, contingent, matured, unmatured, disputed, undisputed, secured or unsecured and whether asserted or assertable directly or derivatively, in law, equity or otherwise and whether asserted or unasserted as of the Effective Date. (Énfasis dado).

De otro lado, el párrafo 44 del *Confirmation Order* advierte sobre la oportunidad de presentar una solicitud de gastos administrativos a cualquier entidad que tenga una reclamación contra el Estado. Específicamente, la aludida sección dispone que:

44. Administrative Claim Bar Date. The last day to file proof of Administrative Expense Claims shall be ninety (90) days after the Effective Date, after which date, any Administrative Expense Claim, proof of which has not been filed, shall be deemed forever barred, and the Debtors and Reorganized Debtors shall have no obligation with respect thereto; provided, however, that no proof of Administrative Expense Claim shall be required to be filed if such Administrative Expense Claim (a) shall have been incurred (i) in accordance with an order of the Court or (ii) with the written consent of the applicable Government Parties expressly granting such Administrative Expense Claim, (b) is a Professional Claim, (c) is an intergovernmental Claim, (d) is an Administrative Expense Claim of the IRS for the payment of taxes incurred by any of the Debtors during the period from and after the Commonwealth Petition Date, the ERS Petition Date, or the PBA Petition Date, as applicable, (e) **relates to actions occurring in the ordinary course during the period from and after the respective Debtor's petition date up to and including the Effective Date**, (f) relates to a Claim that is subject to the provisions of the ACR Order, including, without limitation, "grievance claims" relating to any of the Debtor's collective bargaining agreements, or (g) is the subject of a pending motion seeking allowance of an administrative expense pursuant to section 503(b) of the Bankruptcy Code as of the entry of this Confirmation Order; and, provided, further, that any such proof of Administrative Expense Claim by a governmental unit shall remain subject to the rights

and interests of the Debtors and Reorganized Debtors, as the case may be, and any other party in interest to interpose an objection or other defense to the allowance or payment thereof. (Énfasis nuestro)

Al respecto, la Sección 1.52 del Plan de Ajuste de la Deuda define una reclamación de gastos administrativos como:

1.52 Administrative Expense Claim:

A Claim against the Debtors or their Assets constituting a cost or expense of administration of the Title III Cases asserted or authorized to be asserted, on or prior to the Administrative Claim Bar Date, in accordance with sections 503(b) and 507(a)(2) of the Bankruptcy Code arising during the period up to and including the Effective Date, and otherwise complying with applicable Puerto Rico law, including, without limitation, subject to the occurrence of the Effective Date, and except as provided in Section 3.5 hereof, Consummation Costs and PSA Restriction Fees; provided, however, that, under no circumstances shall an Administrative Expense Claim include the PBA Administrative Expense Claim.

En cuanto a las reclamaciones de gastos administrativos, la Sección 1.51 del Plan de Ajuste de la Deuda dispone que:

1.51 Administrative Claim Bar Date:

Unless otherwise ordered by the Title III Court, the date established by the Title III Court and set forth in the Confirmation Order as the last day to file proof of Administrative Expense Claims, which date shall be no more than ninety (90) days after the Effective Date, [...]

Cónsono a lo anterior, el *Notice of (A) Entry of Order Confirming Modified Eighth Amended Title III Plan of Adjustment of the Commonwealth of Puerto Rico, et al. Pursuant to Title III Of PROMESA and (B) Occurrence of the Effective Date* presentado por la Junta de Supervisión Fiscal el 15 de marzo de 2022, en el caso 17-03283-LTS, estableció como fecha límite el 13 de junio de 2022 para que los acreedores presentaran una solicitud de pago por Reclamaciones de Gastos Administrativos al amparo del párrafo 44 del *Confirmation Order*.

**III.**

El Departamento de Recursos Naturales alega que el foro primario erró al determinar que el nuevo mecanismo de paralización no aplica a las reclamaciones surgidas posterior a la petición de quiebra. Aduce que el interdicto permanente es de total aplicación al presente caso y que aplica a reclamaciones *post-petition* según establecido en el *Confirmation Order*. Consecuentemente, nos solicita la paralización del caso, en virtud del interdicto permanente esbozado en el *Confirmation Order*.

La recurrida, por su parte, alega que el Tribunal de Quiebras nunca tendrá autoridad sobre acciones incoadas en otros foros, surgidas luego de la fecha de la petición de quiebra. Aduce que estas nunca formaron parte del marco de aplicación de la quiebra<sup>4</sup>. Agregó que el párrafo 59 del *Confirmation Order* queda limitado por la sección 92.11 del Plan. Sostuvo que según se desprende del *Confirmation Order* y la Ley, los casos o reclamos que quedan bajo interdicto permanente son aquellos que son descargados en el proceso de quiebras. Esto es, a los pleitos o reclamaciones que formaron parte del catálogo de deudas notificados al Tribunal de quiebras. Aseveró que la causa de acción contenida en el caso de epígrafe no está contemplada dentro de los reclamos objeto del interdicto permanente establecido por el *Confirmation Order*. Por ello, aduce que el TPI resolvió correctamente al denegar la solicitud de *injunction* permanente. Evaluamos.

De acuerdo con las disposiciones citadas en la exposición del derecho, el *injunction* que provee del párrafo 59 del *Confirmation Order*, es aplicable a todas las entidades con reclamaciones pasadas, presentes o futuras contra el Estado. Esta

---

<sup>4</sup> Alegato en oposición, pág. 5.

paralización aplica desde y después de la fecha de efectividad del Plan de Ajuste a cualquier procedimiento judicial, arbitral, o administrativo sobre cualquier reclamación, deuda o responsabilidad contra el Estado.

A su vez, la Sección 92.2 del referido Plan, incorporada al antes mencionado párrafo 59 del *Confirmation Order* provee, en esencia, para la descarga y relevo de las reclamaciones o causas de acción, contra los deudores, que surjan antes de la fecha de efectividad del Plan (15 de marzo de 2022). Ello incluye cualquier interés acumulado de tales reclamos desde y luego de la fecha de petición. A su vez, establece que, a partir de la fecha de efectividad del plan, la Orden de Confirmación constituye una determinación judicial que releva al deudor de las reclamaciones descargadas.

De los hechos que informa esta causa surge que el **3 de mayo de 2017** la Junta de Supervisión y Administración Financiera presentó una petición de quiebra a nombre del Gobierno de Puerto Rico. Posteriormente, el **10 de agosto de 2018**, FLL y el Departamento de Recursos Naturales formalizaron un contrato de servicios profesionales y consultivos. El **3 de febrero de 2020** FLL instó una demanda contra el Departamento de Recursos Naturales por incumplimiento de ese contrato. Durante este trámite, el 18 de enero de 2022, el Tribunal Federal emitió un *Confirmation Order* mediante el cual se aprobó el Plan de Ajuste de la Deuda, efectivo al **15 de marzo de 2022**. Así pues, el *injunction* permanente dispuesto en el *Confirmation Order*, incluye aquellas causas que surgieron después de la fecha de petición de la quiebra (post-petition), pero antes de la fecha de efectividad del Plan de Ajuste. Por tanto, opera con toda fuerza y

vigor al caso que atendemos, el cual, como expusimos, fue instado el 3 de febrero de 2020 antes de la efectividad del Plan de Ajuste.

En ese escenario, el párrafo 44 del *Confirmation Order* provee como remedio la otorgación de los gastos administrativos. Estos se debían reclamar dentro del periodo de noventa días de la fecha de efectividad del Plan, esto era al 13 de junio de 2022. Sobre la mencionada fecha límite, el Departamento de Recursos Naturales nos informó, en la nota al calce número 8 de su alegato, que varios demandantes a nivel estatal solicitaron a la Corte de Título III, Case No. 17BK3283-LTS una extensión del referido término. Manifiestan que la extensión solicitada aún está pendiente de evaluación en los méritos, pues la Junta de Control Fiscal, solicitó prórroga para presentar su postura al respecto.<sup>5</sup>

No obstante a lo anterior, reiteramos que la acción de epígrafe quedó paralizada de forma permanente por disposición del *Confirmation Order* emitido el 18 de enero de 2022. De manera que, erró el foro primario al denegar la petición del Gobierno. Consecuentemente, carece de jurisdicción para continuar el presente pleito.

#### **IV.**

Por los fundamentos antes expresados, se expide el auto de *certiorari* y revocamos la *Resolución* recurrida. A tenor con lo aquí resuelto decretamos la paralización del caso de epígrafe.

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones

---

<sup>5</sup> Tomamos conocimiento de este trámite (Reglas 201 y 202 de Evidencia, 32 LPRA, Ap. VI, R.201 y 202). Advertimos que el 1ro de noviembre de 2022, la Corte de Quiebra emitió un *Order Granting Urgent Consensual Omnibus Motion for Extension of Deadlines*.